

POSICIONES

Círculo Cívico de Opinión
1 de julio de 2013

SUPERAR LA DESAFECCIÓN, RECUPERAR EL APOYO CIUDADANO

RELEVANTE, GENERAL Y RECURRENTE

La crisis ha provocado en la ciudadanía española, también en la europea, una extensión de la desafección hacia la política. Esta desafección no cuestiona el sistema democrático, pero sí la capacidad de lograr que la salida de la crisis se produzca de una manera rápida, eficaz y cohesionada.

En tanto en cuanto el ajuste está siendo soportado de forma desigual por diferentes sectores económicos y grupos sociales, la ciudadanía percibe que los costes de la crisis se están repartiendo de forma inequitativa. También observa que la Unión Europea, que desde la instauración de la democracia ha sido un aliado estratégico a la hora de llevar a cabo reformas que incrementaran el bienestar y la cohesión social, está funcionando no sólo de forma sesgada y poco democrática, al primar los intereses de unos países sobre los de otros,

sino ineficaz, en la medida en que sus soluciones llegan siempre tarde o son insuficientes. Por último, la ciudadanía española también aprecia nítidamente hasta qué punto el sistema político-institucional, seriamente dañado en alguno de sus componentes esenciales, se ha convertido en un elemento agravante o retardante de la salida de la crisis.

En este documento, el Círculo Cívico de Opinión sostiene que, para superar la desafección, se deben adoptar medidas en tres ámbitos diferentes, pero interrelacionados entre sí: el global, el europeo y el nacional. Actuar sobre estos tres ámbitos es crucial, pues son las decisiones erróneas u omisiones de actuación en cada uno de ellos las que alimentan el malestar democrático y la desafección ciudadana. Para salir de esta crisis, y hacerlo de forma eficiente, democrática y con el apoyo de la ciudadanía, debemos entender cómo hemos entrado en ella y tomar las medi-

das que permitan corregir los errores cometidos.

EI PRIMER ELEMENTO ES LA CRISIS FINANCIERA, CUYO ORIGEN ES GLOBAL

Diagnóstico

La crisis que vivimos tiene su origen en los mercados financieros. Por un lado, el crecimiento exponencial de éstos en las últimas décadas ha tenido consecuencias sumamente positivas, ya que la alta disponibilidad de crédito ha servido para financiar el consumo y la inversión y, por tanto, el crecimiento y el empleo en nuestras economías. Sin embargo, al mismo tiempo, la imprudencia de muchos operadores, combinada con la laxitud regulatoria y una insuficiente supervisión, propició asumir una serie de riesgos que a la postre se demostraron fatales para el sector financiero en su conjunto, obligando a los Estados a intervenir con recursos públicos para salvar el sector.

En una primera fase, la inestabilidad derivada del sobredimensionamiento y sobreendeudamiento del sector financiero afectó fundamentalmente a EE.UU. y al Reino Unido, cuyos gobiernos tuvieron que intervenir con recursos públicos para evitar el colapso de bancos y aseguradoras, aunque también hubo países de la eurozona en apuros, viéndose obligados también a rescatar a algunos operadores. Posteriormente, la crisis financiera se transmitió a la eurozona, convirtiéndose en una crisis de confianza en la solidez y viabilidad del euro. En la eurozona, la crisis prendió a través de dos transmisores: el exceso de endeudamiento público (Grecia, en una primera fase; posteriormente, Portugal e Italia) y el sobreendeudamiento privado y la pre-

caria situación del sistema bancario (Irlanda, al comienzo; luego, España y Chipre).

Es sobre este trasfondo de inestabilidad financiera global, originada en el sector privado, en el que las debilidades del euro y de las finanzas públicas de los estados de la eurozona actúan como agravantes de la crisis, convirtiéndose en un formidable obstáculo para su rápida solución. Reparar los problemas de diseño de la Unión Monetaria y sanear las finanzas públicas de los estados de la eurozona son, desde luego, tareas ineludibles si se quiere garantizar la supervivencia del euro y proteger la eurozona de futuros choques financieros. No obstante, para evitar la recurrencia de crisis como la actual, es evidente que, además de reforzar el diseño y la gobernanza del euro, sanear las finanzas públicas e introducir reformas estructurales que impulsen el crecimiento, es imprescindible seguir poniendo el foco también en el sector privado.

Impacto sobre la legitimidad

La crisis genera un déficit de legitimidad que afecta a todas las democracias occidentales. La ciudadanía asocia los recortes en el gasto público, la contracción de la actividad económica y el desempleo a la necesidad de paliar una crisis originada en el sector financiero. El empleo de recursos públicos para rescatar a un sector financiero que, al hacerse “demasiado grande para caer”, traslada sus externalidades a los ciudadanos y contribuyentes, subvierte por completo la lógica de riesgo moral que debe dominar la actividad del sector privado y de la economía de mercado.

Los fallos en la supervisión del sector, junto con la dificultad de exigir responsa-

bilidades por lo acontecido a reguladores y regulados, pone en cuestión la capacidad de las democracias de supervisar y controlar adecuadamente el sector financiero. De ahí que hayan surgido de nuevo los debates, tanto en EE.UU. como en Europa, sobre la desigualdad, la redistribución, el papel del Estado y la globalización. Adoptar medidas que garanticen un mejor funcionamiento de los mercados es, pues, imprescindible tanto desde el punto de vista de la lógica de la eficiencia económica como de la legitimidad política y democrática. En ausencia de estas medidas, la globalización se deslegitimará y las sociedades democráticas tendrán que hacer frente a movimientos anti-mercado y de carácter populista cada vez más poderosos. Evitar la ingobernabilidad y la deslegitimación requiere, pues, una mejor regulación, tanto en casa como en el ámbito global.

Propuestas

Para paliar este déficit, es necesario tomar una serie de medidas de calado. La mayoría deberían ser adoptadas aunque el euro no existiera e independientemente del futuro de éste. Algunas, que no son pocas, ya se han tomado, tanto en el ámbito global como en el europeo. Destacan por su importancia los nuevos estándares relativos a los requerimientos de capital (Basilea III) o las medidas relativas a los paraísos fiscales y la fiscalidad de las multinacionales aprobadas en el marco del G-20 y de la OCDE. También hay que mencionar la puesta en marcha en el ámbito europeo de nuevas instituciones supervisoras y de control de riesgos sistémicos, la aprobación del impuesto sobre las transacciones financieras, las nuevas normas que regulan las remuneraciones del sector o la obligatoriedad de una mayor transparencia

fiscal. La mayoría de estas medidas requieren acciones globales, en el marco del G-20, el G-7 o la OCDE, pero deben ser implantadas también en el ámbito nacional. Perseverar en este rumbo es esencial si se quiere recuperar la confianza de la ciudadanía. Aquí la eurozona tiene un importantísimo papel que jugar, pues mediante sus acciones debe señalar el camino a otros, tanto dentro como fuera de la UE, a la vez que reclamar para sí la legitimidad derivada de la eficacia regulatoria, seriamente puesta en entredicho durante la última década.

EL SEGUNDO ELEMENTO DE CRISIS ES EL ESPECÍFICAMENTE EUROPEO

Diagnóstico

En la eurozona, las instituciones de gobernanza económica de la UE no fueron lo suficientemente eficaces ni firmes a la hora de prevenir la acumulación de la serie de desequilibrios fiscales y de competitividad que la situarían en una posición de suma vulnerabilidad ante la crisis financiera. En la década posterior al lanzamiento del euro, la mayoría de los miembros de la eurozona, desde Alemania hasta Grecia, pudieron incumplir impunemente las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) relativas a los límites aceptables de deuda y déficit público. Mientras, el exceso de dinero barato provocado por una política monetaria demasiado laxa enmascaraba una aguda pérdida de competitividad en los países del sur de Europa. Pero, pese a los indicadores de riesgo que se acumulaban (déficits comerciales, expansión incontrolada del endeudamiento privado y pérdida de competitividad), no se adoptaron medidas, ni en el ámbito nacional ni en el europeo.

Posteriormente, una vez declarada la crisis, los Estados no actuaron con la suficiente eficacia ni rapidez para tomar las medidas adecuadas que permitieran a los Estados miembros salir de ella, dando paso a una crisis de confianza en el euro que se cebaría particularmente en los países del sur de Europa, más vulnerables en razón de sus altos niveles de endeudamiento. A lo largo de la crisis, el modo en el que se han gestionado muchas decisiones (desde las quitas de deuda a Grecia, a la imposición de un gravamen a los ahorradores en Chipre) han sembrado la desconfianza entre los mercados financieros, que han llegado a cuestionar la supervivencia de la moneda común, agravando la crisis hasta extremos insoportables.

La incapacidad de actuar de la UE ha tenido dos componentes. El primero ha sido de carácter técnico, pues al comienzo de la crisis la UE carecía de los instrumentos adecuados para tratar con ella: ni disponía de cortafuegos que pudieran evitar que las deudas del sector privado saltaran al público y viceversa, ni tenía a su alcance mecanismos que le permitieran intervenir en los mercados de deuda y aliviar la presión sobre las finanzas de los Estados miembros. El segundo ha sido de carácter político, al manifestarse una discrepancia fundamental entre países acreedores y deudores respecto de los orígenes de la crisis y, por tanto, respecto de las medidas que hay que adoptar para superarla. Mientras que para los acreedores la responsabilidad de la crisis recaería sobre los deudores, que habrían de hacer frente a las consecuencias de vivir por encima de sus posibilidades emprendiendo un camino caracterizado por la austeridad y las reformas estructurales, para éstos, es decir, los deudores, la responsabilidad debería ser compartida por los

acreedores, que irresponsablemente inundaron con su excedente de liquidez las economías de sus vecinos.

La confluencia de ambas carencias, técnicas y políticas ha llevado a la UE a adoptar un patrón de toma de decisiones caracterizado por el "demasiado poco", el "demasiado tarde" y el "demasiado divididos". En estos últimos años, la UE se ha instalado en un sistema de crisis permanente en el que las decisiones sólo se han tomado ante la visión del abismo bajo los pies. Pero inmediatamente después de cada decisión, cuando el peligro existencial ha retrocedido, los miembros de la eurozona se han relajado, abandonando la tarea. De esa manera, los problemas de gobernanza y de diseño de la eurozona, que impiden o ralentizan la solución de la crisis, han terminado por convertir la crisis económica en una crisis política e institucional.

Efecto sobre la legitimidad

El efecto sobre la UE de esta mala o insuficiente gobernanza de la propia UE es doble: por un lado, los fallos de diseño han acentuado la crisis, haciéndola más profunda y extensa que la que sufren los países fuera de la zona euro. Por otro, los fallos de gobernanza hacen difícil tomar las decisiones que se necesitan, provocando que la salida de la crisis sea más larga y costosa. Estos fallos de funcionamiento, que agravan y prolongan innecesariamente la crisis, generan desafección con la UE y alientan el populismo, que aspira a recoger la protesta de la ciudadanía contra un sistema político que no es capaz de gobernar la economía en beneficio de la mayoría y producir crecimiento y empleo.

Parte del problema con el que nos enfrentamos es que la actuación de la

UE en estos años ha borrado las líneas divisorias que marcaban la separación entre Bruselas y los Estados miembros. En lugar de visualizar un gobierno europeo que toma decisiones en función de intereses generales, la ciudadanía observa cómo “Bruselas”, “Frankfurt” o, peor, “Berlín” han entrado de lleno en ámbitos tradicionalmente vedados a su acción y políticamente muy sensibles, como los mercados laborales, los servicios públicos, como la sanidad o la educación, o los sistemas de pensiones. Esa fusión entre ambos niveles de gobierno es muy problemática, ya que da lugar a un choque de legitimidades entre las decisiones que se toman en el ámbito europeo, generalmente guiadas por criterios técnicos, y las demandas de la población en los Estados miembros, que rechazan esas decisiones por injustas e inequitativas.

Cuatro países de la eurozona (Irlanda, Grecia, Portugal y Chipre) están intervenidos por la Troika; otro (España) tiene intervenido su sector financiero, y un sexto (Italia) está constantemente vigilado. En todos ellos, y en otros miembros de la eurozona, la percepción dominante es que, después de las elecciones, los gobiernos cambian, pero las políticas se mantienen intactas, lo cual supone privar a los ciudadanos de una de las dimensiones más importantes de la democracia: la de elegir entre alternativas distintas. Paradójicamente, una gran parte de la gestión de la crisis, desde 2008 hasta ahora, ha ido orientada a restringir el margen de maniobra de los Estados y sólo algunas veces a ampliar la capacidad de actuación de la UE. Allá donde la dinámica política interna ha llevado a la adopción de un camino “no apropiado” (Italia, con las resistencias de Berlusconi a adoptar las reformas señaladas por el Banco Central Europeo

(BCE); o Grecia, con el empeño de Papandreu de convocar un referéndum que legitimara el plan de ajuste sugerido por la Troika, la alternancia democrática ha sido suspendida temporalmente dando paso a una suerte de estado de excepción tecnocrático.

En la situación actual, la UE avanza hacia un doble conflicto. El primero tiene lugar con los ciudadanos, pues, según muestran las encuestas, la confianza en la UE se ha hundido como consecuencia de la crisis, tanto en los países deudores como en los acreedores; y, especialmente, en los países intervenidos, total o parcialmente, como España. El segundo conflicto tiene lugar entre los Estados, pues al adentrarse las decisiones europeas en el núcleo duro de su soberanía, las instituciones de los Estados miembros (fundamentalmente, los Parlamentos y los Tribunales Constitucionales), tanto de los países acreedores como de los deudores, reclaman aprobar o rechazar esas decisiones. Como resultado, la UE camina en una doble senda de conflicto político: la que marca, a un lado, la tensión entre élites y ciudadanos, que fácilmente genera un círculo vicioso en el que tecnocracia y populismo se alimentan mutuamente; y, al otro, el enfrentamiento entre los Parlamentos nacionales y Tribunales Constitucionales de unos y otros Estados, deseosos de preservar la soberanía y autonomía para cuestiones, sobre todo la fiscalidad, que están en el núcleo de la legitimidad democrática.

Propuestas

Al no poder legitimarse por la vía de la identidad común, que todavía es débil, la UE necesita un elevado rendimiento económico. Pero, como los resultados son malos, la legitimidad se resien-

te. Ello pone el foco sobre la naturaleza poco democrática y transparente de los procedimientos. Cuando las políticas funcionan, el gobierno tecnocrático y la falta de transparencia pueden resultar tolerables. Pero cuando, como en el caso europeo, la política económica falla, pues al no ir acompañada de medidas de estímulo no permite aprovechar el rendimiento de las reformas y la consolidación fiscal, la legitimidad democrática de las instituciones europeas y de esas políticas es puesta en cuestión.

Recuperar la legitimidad requiere, pues, medidas en dos ámbitos: en el de los resultados y en el de los procedimientos. En el primero, resulta imperativo cambiar las políticas actuales, que no están funcionando, por otro tipo de políticas. Ello requiere, en primer lugar, que Berlín reconozca que la traslación sin más al resto de Europa del modelo de ajuste que Alemania se aplicó a sí misma en la década pasada no sólo no está funcionando en la práctica, sino que es insostenible políticamente. La germanización económica de Europa, puesta en práctica sin un marco político y económico de corte federal que la acompañe, pone en peligro el proyecto de integración europea, que requiere la preservación de una serie de delicados equilibrios y el respeto a las identidades nacionales. Europa necesita, por lo tanto, un nuevo pacto político y económico que legitime los acuerdos adoptados en estos últimos años y que permita reconstruir la confianza perdida, tanto entre los europeos, como entre ellos y sus instituciones. La "Europa alemana" podrá acaso triunfar económicamente, pero al coste quizá de fracasar políticamente.

Lo segundo son las instituciones y los procedimientos. Democracia y fiscali-

dad están íntimamente unidas. Por esa razón, la democracia nacional tiene que ser completada en el ámbito europeo con nuevas instituciones y nuevas formas de legitimación. Hoy, la legitimación democrática de la UE es sólo indirecta, pues el Parlamento Europeo no tiene suficiente entidad democrática ni elige un gobierno de verdad. Debemos, pues, reforzar la capacidad de actuación de las instituciones europeas, Comisión y Parlamento, que representan el interés general europeo, poniendo fin a los excesos y asimetrías de poder del Consejo, el Eurogrupo, el BCE o Berlín.

La salida de la crisis del euro requiere una centralización mayor de la autoridad y una profundización de la democracia en el ámbito europeo: la sola combinación de austeridad y reformas estructurales, como pretende Alemania, no nos sacará de la crisis. Compartimos una moneda y un gran mercado interior con cuatro libertades de circulación: bienes, personas, capitales y servicios. Para gobernar y regular esa área, necesitamos instituciones de corte federal. Negarlo es abocarnos a la inestabilidad, la desafección, el sometimiento a otros e, incluso, a la ruptura del euro. La hoja de ruta presentada por el Presidente del Consejo, Van Rompuy, en junio del año pasado y endosada por el resto de las instituciones europeas a continuación, establece claramente los objetivos: una unión bancaria, una unión fiscal, una unión económica y una nueva legitimidad democrática para sostener ese edificio. Esto supone la puesta en marcha de un mecanismo europeo de garantía de depósitos, la emisión de eurobonos, el paso a un presupuesto de la UE financiado con impuestos europeos y el respaldo de un gobierno económico europeo legitimado en las urnas y controlado por el Parlamento Europeo. Apoyar este

proceso, involucrando a su vez a la ciudadanía en él, es esencial si se quiere que ésta vuelva a confiar en la UE.

EL TERCER ELEMENTO DE LA CRISIS ES PROPIAMENTE NACIONAL, PERO TIENE UNA CONEXIÓN EUROPEA

Diagnóstico

Siendo los problemas de diseño y gobernanza iguales para todos los Estados miembros, es evidente que la gravedad de la crisis está en función directa de la solidez de la democracia y de las instituciones nacionales. A mayor solidez de estas instituciones y políticas, mayor capacidad de sobrevivir la crisis e, inversamente, cuanto mayor debilidad nacional, más afectará la crisis. En España, como en los otros países del sur de Europa, la crisis se ve agravada por problemas que tienen que ver con el mal funcionamiento de instituciones claves: gobiernos, partidos políticos, instituciones reguladoras, supervisoras y de control, parlamentos, tribunales de justicia y gobiernos regionales. Como ha señalado el Círculo Cívico de Opinión en tomas de posiciones anteriores, la sensación de fallo institucional y de agotamiento del modelo salido de la Constitución de 1978 es evidente.

Estas debilidades internas no sólo agravan nuestra crisis, sino que hacen más difícil salir de ella. En el ámbito europeo, además, España arrastra un déficit de presencia y actuación muy singular. La desidia y dejadez de los últimos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, a la hora de construir una política europea sólida nos ha privado de las herramientas claves para hacer llegar a nuestros socios los puntos de vista y las necesidades de

España. Como consecuencia, España, que cumplió lealmente con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento a lo largo de todos sus años, llegando a 2007 en un situación de déficit y deuda mejor que la propia Alemania, no ha sabido contener ni rebatir una narrativa de la crisis basada en la irresponsabilidad fiscal que culpabiliza de los problemas del euro a países como el nuestro, pero exonera de toda responsabilidad a otros.

Esta falta de proyección europea le impide hoy hacer entender con suficiente claridad a algunos de nuestros socios de la UE que la salida de la crisis tiene como condición necesaria la consolidación fiscal y las reformas estructurales, pero que requiere a su vez de políticas europeas de apoyo y de un renovado diseño de las instituciones de la eurozona. El drama del desempleo español, que alimenta la desafección política, requiere todo un cambio en la política económica y en el diseño institucional de la UE, un cambio que España no está hoy por hoy en condiciones de lograr debido a su debilidad política en Europa.

Impacto sobre la legitimidad

El resultado de estas debilidades nacionales es un cambio histórico en la posición de España dentro de la UE y en la percepción que de la UE tienen los españoles. La UE ha dejado de aparecer como un facilitador de las reformas, como una solución al problema español, para convertirse en un problema en sí mismo, que también requiere solución. De la europeización orgullosa de España, hemos pasado a una sensación de divergencia económica y de sometimiento político. De socios europeos y sujetos activos de la integración europea, hemos pasado a objetos de la des-

confianza y, en consecuencia, a estar sujetos a una estricta vigilancia y condicionalidad. Por las razones descritas anteriormente, los españoles se sienten cada vez menos identificados con Europa (al fin y al cabo ¿dónde está esa Europa de la que sentirse orgulloso ciudadano?) y más súbditos sin capacidad de decisión.

La comparación entre los Eurobarómetros anteriores a la crisis (EB67/2007) y los últimos disponibles (EB78/2012) muestran claramente este deterioro en la confianza de los españoles en la UE: si al comienzo de esta crisis, los ciudadanos españoles que confiaban en la UE superaban en 42 puntos a los que no lo hacían (el 65% confiaba y el 23% desconfiaba), hoy sólo el 20% de los españoles confía en la UE, mientras que un 72% dice desconfiar. Por tanto, la confianza en la UE en España ha dado un vuelco desde los +42 puntos a los -52 puntos.

Propuestas

España debe luchar por restaurar los equilibrios dentro de la UE, tanto en el plano económico, donde estamos asistiendo a una peligrosísima diferenciación entre centro y periferia, acreedores y deudores, como en los aspectos institucionales, ya que el poder se ha desplazado desde la Comisión y el Parlamento hasta el Consejo, el BCE y Berlín. A la vez, debe intentar resolver el choque de legitimidades. Para ello deberá reforzar las instituciones europeas y, al tiempo, para que no haya vaciamiento de la democracia nacional, también reforzar las instituciones de control democrático en el ámbito nacional.

La fortaleza democrática de los Estados miembros no debe ser vista como un obstáculo, sino como un ali-

ciente, pues sólo unas democracias fuertes en casa pueden hacer una democracia fuerte en Europa. En el pasado, muchos en España han pensado que reforzar la gobernanza europea y reforzar las instituciones nacionales eran tareas contradictorias. Sin embargo, esta crisis muestra lo contrario: que Europa es tan fuerte o tan débil, tanto en términos de gobierno económico cuanto de legitimidad democrática, como lo son sus Estados. Si quieren evitar la acusación de "no nos representan", nuestras Cortes Generales, que hasta ahora han sido un receptáculo pasivo de la integración europea, deben comenzar a tomarse en serio la integración europea, pues ésta se ha convertido tanto en un problema desde el punto de vista democrático, como en una parte importante de la solución para los problemas de desafección que sufre la democracia española.

* * *

Para salir de la crisis, no sólo es necesario tomar medidas eficaces desde el punto de vista económico, sino medidas que restauren la confianza de la ciudadanía en las instituciones, nacionales, europeas y globales. La legitimidad del sistema político descansa tanto sobre la efectividad, que se ha resentido mucho, como sobre la calidad democrática de los procedimientos. Por esa razón, las medidas que proponemos en este documento actúan sobre los tres niveles que consideramos responsables en parte o en buena medida de la crisis: el sector financiero, la gobernanza de la Unión Europea y el sistema político nacional.

Un sistema financiero eficiente, bien regulado y correctamente supervisado, argumentamos aquí, es fundamental

para generar crecimiento y riqueza. De la misma manera, para volver a conectar a la UE con sus ciudadanos, es imperativo democratizar y perfeccionar más aún la gobernanza europea, así como completar el diseño de la Unión Monetaria, añadiendo mecanismos de integración avanzados en los ámbitos financiero, fiscal y macroeconómico.

Todo ello es una condición necesaria, pero no suficiente, para evitar la desafección, pues, en último extremo, necesitamos que nuestro sistema político e institucional se renueve profundamente para situarse a la altura de las circunstancias y los desafíos que tenemos por delante.





SOCIOS

Miguel Aguiló
Ingeniero de Caminos

Fernando Becker
Catedrático de Economía Aplicada

Antonio-Miguel Bernal
Historiador

Victoria Camps
Catedrática de Filosofía Moral y Política

Luis Caramés
Catedrático de Economía Aplicada

Adela Cortina
Catedrática de Ética y Filosofía Política

Antonio Cortina
Director Adjunto del Servicio de Estudios
Banco Santander

Álvaro Delgado-Gal
Escritor

Luis Fernández-Galiano
Arquitecto

Juan Pablo Fusi
Historiador

José Luis García Delgado
Catedrático de Economía Aplicada

José Gasset
Director de Relaciones Internacionales
Iberdrola

Jaume Giró
Director General Adjunto
CaixaBank

Josefina Gómez Mendoza
Catedrática de Geografía

Fernando González Urbaneja
Periodista

Rodolfo Gutiérrez
Catedrático de Sociología

Emilio Lamo de Espinosa
Catedrático de Sociología

Cayetano López
Catedrático de Física Teórica

Carlos López Blanco
Director Global de Asuntos Públicos
Telefónica

Alfonso Maldonado
Catedrático de Ingeniería Geológica

Francisco Mangado
Arquitecto

Manuel Martín Rodríguez
Catedrático de Economía Política

Antonio Merino
Director de Estudios y Análisis del Entorno
Repsol YPF

Santiago Muñoz Machado
Catedrático de Derecho Administrativo

Luis Oro
Catedrático de Química Inorgánica

Eva Piera Rojo
Directora de Relaciones Institucionales
BBVA

Josep Piqué
Presidente del Círculo de Economía

Javier Rupérez
Embajador de España

José Manuel Sánchez Ron
Catedrático de Historia de la Ciencia

José María Serrano Sanz
Catedrático de Economía Aplicada

José Ignacio Torreblanca
Profesor de Ciencia Política

Fernando Vallespín
Catedrático de Ciencia Política

Juan-Miguel Villar Mir
Presidente de OHL

José Ignacio Wert*
Sociólogo

**Sin participación activa mientras desempeña sus actuales responsabilidades como Ministro de Educación, Cultura y Deporte.*

RAZÓN DE SER

1. Tras una exitosa transición desde la dictadura a una democracia ya plenamente consolidada, y tras varias décadas de no menos exitosos procesos de modernización económica, social y cultural, España aborda el segundo decenio del nuevo siglo con un escenario incierto. Sin negar la existencia de ámbitos en los que se han efectuado avances importantes, lo cierto es que sobre nosotros pende todavía la salida a la grave crisis económica, y se percibe un claro desgaste de la confianza en la clase política y una crisis de gobernanza que, según muchos, está provocando una puesta en cuestión del mismo modelo de Estado y favorece el aumento de una cierta "fatiga civil". España, que había tenido un gran proyecto nacional unificador, el de la transición, muestra dificultades para reencontrar una visión clara de su interés general por encima de los intereses partidistas y de las prácticas que se arraigan en otros particularismos.

No es sorprendente que, en este contexto, y pocos años después de haber dado por definitivamente resueltos los problemas que atenazaron a regeneracionistas o noventayochistas, broten aquí y allá proyectos de "regeneración" y que incluso se hable de la necesidad de una "segunda transición": para unos, el modo de superar la primera; para otros, el modo de hacerla finalmente efectiva. Ese ímpetu regenerador pone de manifiesto, en todo caso, que España no ha perdido el pulso y que la sociedad civil se inquieta e incomoda ante el presente, buscando alternativas que nos devuelvan a una senda que se corresponda con un más activo papel internacional y sirvan para generar un nuevo proyecto nacional.

2. El Círculo Cívico de Opinión es un producto más de esa coyuntura de incertidumbre, en tanto que foro de la sociedad civil, abierto, plural e independiente, alejado de los partidos pero no neutro (y menos neutral). Su objetivo es ofrecer un vehículo para que grupos de expertos puedan identificar, analizar y discutir los principales problemas y dilemas de la sociedad española, pero con la finalidad de que esos debates, conclusiones y sugerencias puedan trasladarse a la opinión pública.

Para conseguirlo, el Círculo generará propuestas y sugerencias concretas, que serán sometidas al escrutinio de la opinión pública a través de los medios de comunicación, los clásicos y los nuevos, pues pretende utilizar al máximo las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías de la información, para que su voz pueda ser escuchada y se proyecte hacia afuera. El Círculo parte del convencimiento de que no es bueno que los partidos monopolicen el espacio de la política; ésta debe estar abierta también a otros actores; foros como el Círculo pueden contribuir a ello.

3. El Círculo Cívico de Opinión toma la forma jurídica más simple, la de una asociación, y pretende trabajar con el mínimo posible de financiación y el mínimo posible de burocracia. Fundado por un grupo de ciudadanos preocupados por la marcha de la cosa pública, invita a todos los que puedan estar interesados a sumarse a su esfuerzo, contribuyendo tanto con apoyo económico como –lo que es más importante– con su inteligencia y conocimiento.

CÍRCULO CÍVICO DE OPINIÓN

www.circulocivicodeopinion.es
